

Roberto Villa García, **1923 EL GOLPE DE ESTADO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE ESPAÑA, Primo de Rivera y la quiebra de la monarquía liberal**, (2023), Barcelona: Editorial Espasa, 767 pp. **ISBN: 978-84-67070958**

El profesor Roberto Villa publica este extenso libro coincidiendo con el centenario del golpe de Primo de Rivera. En él estudia la situación política y social en la España que precedió al pronunciamiento de 1923, vinculando este hecho con la caída de la monarquía liberal. El libro se compone de catorce capítulos, una introducción y un apartado de conclusiones, notas al final del texto, listado de abreviaturas, anexo de los Gobiernos de España desde marzo de 1921 a septiembre de 1923, nueve páginas de bibliografía y un índice onomástico. A pesar de sus casi ochocientas páginas, resulta de fácil y apasionante lectura, detallando los hechos sin cansar al lector, pero sin ahorrar datos.

En la introducción asistimos a una comisión de 1931 que acusaba al rey de estar detrás del golpe de 1923, razón por la cual se consideraba roto el pacto de la monarquía con su pueblo y se proclamaba legítima la república. Sin embargo, el rey no participó en el golpe; simplemente la sociedad mostraba desapego al régimen constitucional y, mucho antes de que Alfonso XIII la aceptara, había aclamado la solución de Primo de Rivera.

Entrando ya en los antecedentes del golpe, se dedica un capítulo al desastre de Annual (julio 1921), que precipitó todo el proceso. Esta fue una derrota terrible, inesperada, incomprensible para muchos, con miles de muertos, heridos y prisioneros. Se vieron actos de cobardía y de ineptitud que avergüenzan, otros tan crueles que espantan, como el asesinato de algunas guarniciones que ya se habían rendido. También, junto a tantos horrores, hubo muchos casos de valentía y abnegación ejemplares. España, horrorizada, buscó culpables y, de momento, hubo cambio de Gobierno y entró Maura con uno de concentración nacional.

Para depurar responsabilidades se encargó un informe al general Picasso; se imputó a treinta y siete militares, que llegaron a ser setenta y siete tras el paso del informe por el Consejo de Guerra y Marina. Se imputaban comportamientos punibles, pero también otros que no merecían más que una corrección. Se llevó al Congreso este asunto para tratar de aclarar los cargos y atajar los rumores; sin embargo, no sirvió para eso. No hubo acuerdo y ni siquiera se votaron las tres ponencias presentadas, la oposición no permitió una votación que no podía ganar. Se dijeron barbaridades y la sesión terminó con Prieto subido en su escaño acusando e insultando al rey, con los diputados agrediéndose y con los ujieres apagando las luces para que se fuera vaciando la cámara. Sánchez Guerra se fue derecho a presentar su dimisión al rey.

Se llegó así a la formación del último Gobierno constitucional de la monarquía, presidido por García Prieto y formado por partidos de izquierda constitucional; era el cuarto en poco más de dos años y estaba en minoría en el Congreso. Se diseñó una nueva política "civilista" para Marruecos; no dejarían el territorio, pero tampoco atacarían a Abd el Krim, sino que procurarían atraer a los indígenas por medio de una política fundada en el progreso del país; a este efecto, se nombró un alto comisario no militar. El hecho es que los rifeños continuaban en guerra y el Ejército se veía obligado a una resistencia pasiva frente a sus ataques, lo que producía un profundo malestar.

La liberación de los prisioneros del desastre se hizo mediante una gestión oscura, siguiendo las humillantes y onerosas condiciones impuestas por Abd el Krim. Para colmo de males, más de la mitad de los rehenes había muerto y los que sobrevivieron estaban en condiciones calamitosas,

con señales evidentes de haber sido martirizados. Esta gestión provocó la contestación airada y prácticamente unánime del Ejército y el propio ministro de la Guerra se mostró abochornado.

El rey no tenía opción, tenía que seguir con el Gobierno, aunque detestaba a algunos de sus miembros. Se sentía indefenso - y lo estaba – frente a tanta injuria y tampoco le defendían los políticos constitucionales.

El Gobierno consiguió, entre crisis y crisis, convocar elecciones (6 de abril), alcanzando una inestable mayoría en la Cortes. Presentó un programa bastante contradictorio, con grandes planes de reformas sociales y, al tiempo, reducción de impuestos. Habría contención del gasto militar, salvo en Marina y se volvía al viejo tema de las responsabilidades, encargando tres memorias que no servirían más que para dilatar la solución del problema. Ya en mayo hubo crisis, pues dimitió el ministro de la Guerra. A la dificultad de imponer el protectorado civil, se sumó el descontento por el acuerdo del ministro de Estado (Alba) con el Raisuni; este convenio era inaceptable, ya que dejaba en libertad a “moros que habían asesinado a españoles militares y civiles”.

Dos factores de inestabilidad fueron también desencadenantes directos del golpe militar, la violencia sindicalista y el separatismo.

Las luchas sindicalistas entre la CNT y la Unión de los Sindicatos Libres, desataron una espiral de violencia y terror, que sin embargo se trataba como un simple problema de orden público. En 1923, el anarquismo más extremo se hizo con el control del sindicato; se sucedían los atentados y los asesinatos, se contaron cincuenta y tres muertos en Barcelona en menos de seis meses. Todo esto sucedía en un ambiente de impunidad: apenas se detenía a nadie y se producían absoluciones forzadas por el miedo de jueces, jurados y testigos. Durante la huelga de transporte de la CNT en mayo de 1923 se llegó a producir una emergencia sanitaria, ya que no permitían recoger las basuras. El capitán general de Barcelona, Primo de Rivera, pidió la proclamación del estado de guerra para solucionarlo, pero el gobierno no lo permitió. La violencia se extendió a toda España; en Zaragoza, por ejemplo, los anarquistas asesinaron al obispo Soldevila, que tenía ochenta años. La parálisis del poder era total. En contraste, el capitán general de Barcelona y el nuevo gobernador civil, Portela, pusieron fin a la ruinosa huelga con decisión, apoyando con la fuerza pública a los trabajadores que no la seguían.

Por esas mismas fechas, apareció también el nacionalismo decididamente separatista de Acció Catalana. La Lliga, tras retirarse Cambó de la política, se fue radicalizando y se unió en el Congreso a Acció y a los socialistas. A su vez, el Estat Catalá de Maciá preconizaba incluso el uso de la fuerza.

La cuestión de las responsabilidades, por otra parte, había llegado al paroxismo y los enfrentamientos entre políticos por esta causa eran constantes; el verano del año 23 se pasó intentando rematar el asunto entre acusaciones gravísimas. Los más radicales codiciaban incluso la imputación del rey, que estaba solo, sin tener siquiera el apoyo del Ejército. La idea de un golpe militar estaba presente en la sociedad, pero, al contrario de lo que se afirma, el rey no lo alentaba, incluso afirmó en público que no creía que fuera posible en España.

La bochornosa política de Santiago Alba en Marruecos, impidiendo a los militares su propia defensa y obligándoles a dejar inconclusas operaciones de éxito, produjo también enorme indignación. Dentro del Gobierno había posturas irreconciliables; los ministros de Hacienda y Estado por un lado y el de Guerra, por otro.

El ataque de Abd el Krim a Tifarutin el 16 de agosto lo puso todo patas arriba. El ejército consiguió romper el cerco y también se rechazaron los ataques sufridos en la zona occidental, pero todo esto se hizo a costa de un gran número de bajas y los funerales en Tetuán se convirtieron en una formidable protesta contra la política del gobierno. La condena era unánime y por todas partes se oía que la política pasiva había causado las mismas bajas que la campaña ofensiva anterior, sin que hubieran servido para pacificar el territorio.

A esta dramática situación contribuyó también el Partido Comunista, que tenía cierta infiltración en algunas unidades militares. Hubo incidentes muy serios en el embarque del Regimiento Garellano, en Málaga, con incitaciones a desertar y enfrentamientos. El cabo Sánchez Barroso mató a un suboficial, fue juzgado y se le condenó a muerte. No obstante, se le concedió el perdón real y se produjeron escenas vergonzosas en las que se le trataba como si fuera un héroe.

El descontento era general y se focalizaba en la persona del ministro de Estado; el presidente no encontraba la manera de prescindir de él. El gobierno estaba a punto de saltar por los aires.

Se había acordado que Primo iniciara el golpe en Barcelona el 14 de septiembre y sería secundado al día siguiente por la guarnición de Madrid. Esto era sabido, pero no se le dio la importancia que tenía. El Gobierno hizo lo que pudo, llamó a consultas a los principales militares de Madrid, que negaron todo. El rey seguía en San Sebastián con el ministro de jornada, Alba precisamente; éste presentó a García Prieto por carta su dimisión e informó al rey de la inminencia del golpe; Alfonso XIII acogió la noticia con desconcierto, al parecer creyó posible sostener el gobierno si Alba dejaba su ministerio. La audacia de Primo de Rivera y la vacilación del Gobierno y del rey asentaron el golpe.

Antes de que se hubiera hecho público el pronunciamiento, el ministro de la Guerra, general Aizpuru, habló telegráficamente con Primo y le pidió que desmintiera los rumores, pero él no lo hizo y recordó todos los agravios contra el Gobierno, así como la pasividad de éste frente al terrorismo, cortando acto seguido la comunicación telegráfica.

A las dos de la mañana del 13 de septiembre, y rodeado de todos sus generales, el marqués de Estella convocó a los periodistas y les entregó un manifiesto – Al País y al Ejército-, pidiendo que lo publicaran sin comentarios. En él se proclamaba la deposición del Gobierno y la depuración de la clase política. La idea era formar un directorio provisional, sustituido luego por un gobierno de hombres honrados, ajenos a la política profesional. También indicaba el manifiesto que, una vez ejecutadas las operaciones necesarias, España saldría de Marruecos.

Primo de Rivera cortaba amarras con el régimen constitucional sin haber definido su rumbo. Inmediatamente, telegrafió al rey y después a todos los capitanes generales. En un principio, el Gobierno decidió resistir a toda costa, pero carecía de apoyos en el Ejército; como dijo Aizpuru, «todos los capitanes generales están muy amables y muy deferentes, pero todos muy sublevados». Incluso los generales que no se habían sublevado se negaban a hacer armas contra sus compañeros.

El rey llegó a Madrid el día 14 y sondeó a todos los altos mandos del Ejército, comprobando que estaban mayoritariamente con Primo de Rivera. Nadie estaba en contra, ni el mismo Gobierno. La izquierda no monárquica tampoco se opuso al pronunciamiento.

Alfonso XIII llamó a Sánchez Guerra que no quiso ni hablar de hacerse cargo del gobierno. García Prieto no estaba en condiciones ni de intentarlo y, por lo tanto, el rey llamó a Primo de Rivera, limitándose a aceptar unos hechos consumados que el Gobierno no había sabido evitar. Alfonso XIII dijo que no quería la división del Ejército ni una guerra civil, la realidad es que el Ejército no

estaba dividido, pero el rey no podía hacer nada más, no existía alternativa constitucional. Los partidos mayores y menores habían imposibilitado cualquier gobierno.

A pesar de la lealtad al rey del general Primo de Rivera, el golpe que acaudilló supuso la ruptura de la regla más importante de la Monarquía, la forma de cambiar el Gobierno.

Es evidente que a Alfonso XIII no le convenía el golpe del 23 y, por lo tanto, es poco creíble que lo alentara; de hecho, hizo todo lo posible para que continuara el Gobierno de García Prieto. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptarlo, a pesar de que sabía que quedaba prisionero de esa dictadura que él mismo había sancionado.

Ángela Casas Santero

Licenciada en Filosofía y Letras, Sección Historia